RESOLUCIÓN (Expte. A 22/92)

Pleno

Excmos. Sres.:

Fernández Ordoñez, Presidente

Martín Canivell, Vocal

Bermejo Zofío, Vocal

Alonso Soto, Vocal

De Torres Simó, Vocal

Soriano García, Vocal

En Madrid a 22 de mayo de 1992.

El Pleno del Tribunal de Defensa de la Competencia, constituido por los señores que al margen se relacionan y reunido para resolver sobre el recurso A 22/92 contra la Resolución del Ilmo. Sr. Director General de Defensa de la Competencia (Expediente nº 673/90 del Servicio de Defensa de la Competencia), dictada con fecha 6 de febrero de 1992.

ANTECEDENTES DE HECHO

1. Con fecha 18 de marzo de 1992 tuvo entrada en este Tribunal de Defensa de la Competencia escrito firmado por don Bernardo Hernández Bataller en nombre y representación de la UNIÓN DE CONSUMIDORES DE ESPAÑA (UCE), en cuya virtud interponía recurso contra la Resolución del Ilmo. Sr. Director General de Defensa de la Competencia de 6 de febrero de 1992, por la que estimaba que no tenía acogida la denuncia presentada con fecha 17 de abril de 1991 contra determinadas prácticas realizadas por los Corredores de Colegiados de Comercio, consistentes en la celebración de convenios de reparto de ingresos y de gastos y en la tenencia de despachos conjuntos.
2. Esta denuncia fue acumulada a la presentada por el Corredor Colegiado de Comercio, don Pablo Muñoz Cuéllar, sustancialmente coincidente con la anteriormente expuesta.
3. Habíanse personado en dicho expediente el Consejo General de los Colegios Oficiales de Corredores de Comercio y los Colegios Oficiales de Corredores de Comercio de Jerez de la Frontera, Granada, Málaga, Cádiz, Huelva, Jaén, Córdoba y Sevilla.
4. La Dirección General de Defensa de la Competencia, en la Resolución aquí combatida, estimó que tales conductas estaban amparadas por la normativa reglamentaria establecida precisamente por el Ministerio de Economía y

Hacienda en uso de las atribuciones concedidas en la Ley de 26 de julio de 1957, entendiéndose, a los efectos que aquí importan en este expediente sancionador, que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.1. de la Ley de Defensa de la Competencia, no le resulta aplicable el tipo de infracción contenido en el artículo primero de la meritada Ley.

5. Con fecha 23 de marzo de este año tuvo entrada en este Tribunal de Defensa de la Competencia el escrito formulado por don Pablo Muñoz Cuéllar quien, fundándose en lo dispuesto en el artículo cuarenta y siete de la Ley de Defensa de la Competencia, recurre idénticamente la misma Resolución de la Dirección General de Defensa de la Competencia.
6. Planteadas ciertas dudas sobre el plazo de interposición del escrito de recurso, y en cumplimiento de la normativa, este Tribunal remitió con fecha 24 de marzo de 1992, oficio a la Dirección General de Defensa de la Competencia para que, en cumplimiento de lo establecido en el art. 48 de la Ley 16/1989, informara sobre el recurso interpuesto. Lo que así hizo dicho centro directivo, informando asimismo, en su escrito de 26 de marzo de este año, que los cauces por los que el recurso planteado ha de transcurrir han de limitarse desde luego a los hechos objeto de la denuncia no incluyendo hechos nuevos. Completó la Dirección General su informe mediante escrito registrado en este Tribunal el día 31 de marzo.
7. Puesto de manifiesto el expediente a las partes, solicitaron ampliación del plazo concedido para formular alegaciones, lo que fue concedido por Providencias de 20 de abril, 22 de abril y 24 de abril del año en curso.
8. Con fecha 6 de mayo, el Consejo General de los Colegios Oficiales de Corredores de Comercio formuló alegaciones y, tras manifestar cuanto convino a su derecho, concluyó suplicando que se tuvieran por presentado su alegato jurídico.
9. Con igual fecha comparecieron los Colegios Oficiales de Corredores de Comercio de Jaén, Cádiz, Granada, Córdoba, Huelva, Jerez de la Frontera, Málaga y Sevilla realizando alegaciones, en las que, tras manifestar cuanto a su derecho convino, concluyeron suplicando que se tuvieran por formuladas las correspondientes alegaciones.
10. El día 7 de mayo tuvo entrada en este Tribunal el escrito presentado por la UNIÓN DE CONSUMIDORES DE ESPAÑA. Tras las oportunas alegaciones, concluyó alegando que se tuvieran por formuladas las correspondientes alegaciones.

11. Con fecha 11 de mayo tuvo entrada el escrito de don Pablo Muñoz Cuéllar, evacuando sus alegaciones y, tras solicitar que se aplicaran los preceptos que estimó pertinentes de la Ley de Defensa de la Competencia, solicitó la celebración de vista y aportación de diferentes pruebas de índole documental y testifical.
12. El Pleno del Tribunal de Defensa de la Competencia aceptó la abstención de la Vocal Sra. Alcaide Guindo fundada en lo establecido en el artículo 69.1.a) del Reglamento del Tribunal de Defensa de la Competencia, aprobado por Decreto 538/1965 de 4 de marzo.

Ha sido Ponente el Vocal don José Eugenio Soriano García.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1. El procedimiento administrativo, en el supuesto de recursos contra los actos de archivo y trámites dictados por el Servicio, no es una segunda instancia en la que quepa reproducir todo el procedimiento establecido para los expedientes sancionadores abiertos, sino que es un iter procedimental bien preciso y limitado en el que, de acuerdo con los artículos 47 y 48 de la Ley de Defensa de la Competencia, se sustancia con celeridad y abreviación de trámites. Lo que es lógico, puesto que se trata de un procedimiento incidental en el que ya se ha resuelto por el órgano administrativo y lo que está en juego no es el derecho a la defensa sino la potestad de acusación por parte de terceros privados.

El Tribunal de Defensa de la Competencia ha resultado ya suficientemente ilustrado a lo largo del procedimiento y puede, dentro del mismo, formar su juicio sin necesidad de atender a otros datos, por lo que procede desestimar la petición de vista y de las pruebas solicitadas

2. Con independencia de la opinión que pueda tenerse sobre el fondo del asunto -que es materia propia de lo establecido en el art. 2.2 de la Ley de Defensa de la Competencia- dentro de un expediente sancionador como el aquí estudiado, es claro que el artículo 2.1 de la Ley, cuando nos recuerda que "Las prohibiciones del artículo 1º no se aplicarán a los acuerdos, decisiones, recomendaciones y prácticas que resulten de la aplicación de una Ley o disposiciones reglamentarias que se dicten en aplicación de una Ley", impide sancionar las conductas que de no tener dicha norma de cobertura podrían resultar reprochables a la luz de la defensa de la competencia.

Aquí es claro, como recuerda la Resolución de la Dirección General, que dicha norma de cobertura existe, como resulta del análisis de la Ley de 26 de julio de 1957 y del Decreto nº 853/1959, de 27 de mayo.

VISTA la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia y demás disposiciones de aplicación al caso, el Pleno del Tribunal

HA RESUELTO

Desestimar el recurso interpuesto y confirmar la Resolución de la Dirección General de Defensa de la Competencia de 6 de febrero de 1992.

Comuníquese esta Resolución al Servicio de Defensa de la Competencia y notifíquese a los interesados, haciéndoles saber que contra ella podrán interponer recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses contados a partir de su notificación.